

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BRASIL

**PROGRAMA DE APOYO A LAS REFORMAS SOCIALES DE CEARÁ
PROARES III/ FASE II**

(BR-L1612)

PERFIL DE PROYECTO

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Luis Buscarons, Jefe de Equipo; Ian W. Mac Arthur, Jefe Alterno; Marcia Gomes Rocha; Florencia Lopez; Giuliana Daga; y Martha Guerra (SCL/SPH); Laisa Rachter de Sousa Dias (SCL/GDI); Bruno P. Camarano, Arthur Araujo, Higor S. Gomez (CSC/CBR); Krysia A. Avila, Guillermo A. Eschoyez (LEG/SGO); Alexandra Alvear (INE/INE); Mariana Alfonso, Ana Champloni (CSD/CCS); Ana Beatriz de Sousa Esteves (VPS/ESG); Leise Villela de Toledo, David Agustin Salazar (VPC/FMP)

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

PERFIL DE PROYECTO

BRASIL

I. DATOS BÁSICOS

Nombre del Proyecto:	Programa de Apoyo a las Reformas Sociales de Ceará - PROARES III/ Fase II
Número de Proyecto:	BR-L1612
Equipo de Proyecto:	Luis Buscarons, Jefe de Equipo; Ian W. Mac Arthur, Jefe Alterno; Marcia Gomes Rocha; Florencia Lopez; Giuliana Daga; y Martha Guerra (SCL/SPH); Laiza Rachter de Sousa Dias (SCL/GDI); Bruno P. Camarano, Arthur Araujo, Higor S. Gomez (CSC/CBR); Krysia A. Avila, Guillermo A. Eschoyez (LEG/SGO); Alexandra Alvear (INE/INE); Mariana Alfonso, Ana Champloni (CSD/CCS); Ana Beatriz de Sousa Esteves (VPS/ESG); Leise Villela de Toledo, David Agustin Salazar (VPC/FMP).
Prestatario:	Estado de Ceará
Garante	República Federativa de Brasil
Organismo Ejecutor:	Estado de Ceará por medio de la Secretaría de Protección Social, Justicia, Ciudadana, Mujeres y Derechos Humanos
Plan Financiero:	BID (Capital Ordinario): US\$50.000.000 Local: US\$21.428.571 Total: US\$71.428.571
Salvaguardias:	Políticas activadas: ESPS 1; ESPS 2; ESPS 3; ESPS 4; ESPS 9; ESPS 10 Clasificación: "B"

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

A. Justificación

- 2.1 **Contexto económico-social.** El estado de Ceará en el nordeste brasileño tiene una población estimada de 9,2 millones de habitantes, lo que representa el 4,3% de la población brasileña, y su participación en el PIB nacional es alrededor de 2%. Su PIB per cápita se sitúa entre los cuatro menores del país, y representa el 0,5 del PIB per cápita nacional¹. Aunque la región ha sido tradicionalmente pobre, en las últimas décadas, su desempeño económico fue mejor que el promedio nacional y Ceará se recuperó bien del shock de la pandemia, con un crecimiento de 6,3% en 2021, comparado con 4,3% para el país². La pobreza se viene reduciendo paulatinamente y, pese a la crisis provocada por la pandemia, ésta se redujo de 43,1% en 2019 a 40,6% en 2020 (12,9% a 9,3% para la pobreza extrema), debido al pago de beneficios de emergencia por el gobierno federal. No obstante, con la reducción de financiamiento del beneficio, en 2021 hubo un aumento de 596.000 personas pobres y casi 537.000 personas extremadamente pobres en el estado, repuntando la tasa de pobreza a 45,8% y la de pobreza extrema a 15,1%³. La pobreza, que para la población general de Brasil es de 29,6% y para Ceará de 45,8%, se concentra en la población joven con una

¹ Sistema de cuentas regionales Brasil 2020. Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística (IBGE).

² Datos preliminares del IBGE.

³ Síntesis de indicadores Sociales. IBGE 2021.

incidencia de 59,6% entre niños de 0 a 6 años[1]. Las variables género, nivel de educación, recibo de jubilación, pensión, transferencias y principal actividad laboral tienen una relación significativa con la pobreza, siendo principales determinantes la educación y las transferencias gubernamentales[2].

- 2.2 La situación socioeconómica de la población cearense se caracteriza por fuertes desigualdades y la concentración de desafíos en determinados grupos. El más reciente cálculo del Índice de Desarrollo Municipal (IDM) revela que 144 de los 184 municipios cearenses, localizados principalmente en el interior del estado, alcanzan menos de la mitad del máximo puntaje[4]. Adicionalmente a la pobreza que afecta desproporcionadamente a la población infantil, los jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan suman 688.000 personas, lo que representa el 30% del total, entre los cuales destacan las mujeres (36,2%) y residentes del interior rural del estado (33,1%), representando a los más vulnerables[5]. En la última década, el Índice de Vulnerabilidad Social de la Juventud (IVSJ)⁴, un indicador compuesto por el embarazo adolescente, abandono escolar, muerte violenta, y empleo informal, han venido bajando en el estado, pero se incrementó con la pandemia en algunas dimensiones (por ejemplo, la tasa de muertes violentas subió de 22 a 30 por 100.000 personas entre 2010 y 2020) y el ISVJ permanece alto en varios municipios periféricos de las regiones metropolitanos[6]. Por otra parte, la informalidad laboral que afecta a más de la mitad de los trabajadores los deja sin acceso a beneficios de la seguridad social.

B. Avances y desafíos en la asistencia social en Ceará

- 2.3 **Inversión en capital humano y asistencia social.** Ceará ha implementado por más de 20 años un esfuerzo sostenido para fortalecer su política social y ha contado con tres financiamientos consecutivos del BID para este propósito en el marco del Programa de Apoyo a las Reformas Sociales (PROARES). El programa se ha focalizado en municipios priorizados y ha concentrado sus actividades en: (i) la generación de capital humano, por medio de la implementación de Centros de Educación Infantil Temprana (CEI); y (ii) la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo social de individuos y familias, por medio de la expansión y afianzamiento de los variados servicios del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), especialmente los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS). A partir de 2008, el PROARES II (BR-L1053) priorizó sus actividades en los 61 municipios más pobres, utilizando un Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), y seleccionó aquellos con mayor porcentaje de población entre 0 y 24 años. Se financió la construcción de 180 unidades, principalmente CEI y CRAS, pero también fueron construidos Polos de Convivencia para niños y jóvenes de 6 a 25 años, donde según la edad se

⁴ Entre las dimensiones consideradas en la construcción del Índice de Vulnerabilidad Juvenil se encuentran la exposición del contingente juvenil a la violencia urbana, el nivel educativo y el embarazo adolescente. Operacionalmente, para cada una de estas dimensiones se eligió una variable que la representara. Se seleccionó la tasa de mortalidad por agresión (homicidios) en la población masculina de 15 a 19 años, por cada 100.000 habitantes, para expresar la incidencia de los efectos negativos de la violencia urbana entre los jóvenes. De manera análoga, se utilizó la tasa de fecundidad en el grupo de edad de 14 a 17 años para medir, aunque parcialmente, el embarazo adolescente. Para las cuestiones relacionadas con la escolaridad se consideró el grupo de edad de 15 a 17 años y se calcularon dos indicadores: proporción de jóvenes de 15 a 17 años que no asisten a la escuela en el total de personas de este grupo de edad; y proporción de jóvenes de 15 a 17 años que asisten a la escuela secundaria. El promedio de estas variables se transformó en una escala que va de 0 a 100 puntos, donde cien corresponde al peor nivel de vulnerabilidad y cero a su ausencia.

ofrecen cursos de informática, refuerzo escolar, y educación profesional. Asimismo, PROARES III 1ª fase permitió llegar a otros 90 municipios, con 55 CEI y 24 CRAS adicionales, así como pequeñas obras para deporte y convivencia de las familias. Más allá de la expansión de cobertura de los citados servicios, el PROARES ha contribuido a una mejora de la calidad de los mismos como evidencia el indicador de Desarrollo de los CRAS (IDCRAS) que subió de 3,5 a 3,7 entre 2014 y 2017⁵. Por otra parte, la evaluación realizada aplicando el instrumento ECER_S-R (Escala de Evaluación de Contextos Educativos Infantiles) identificó resultados positivos en variables de calidad como son la integración entre los niños y un mayor grado de actividades grupales. La segunda fase del programa permitirá la consolidación de las políticas públicas implementadas, al mismo tiempo que propone avances significativos en la cobertura y la profundización de los procesos de calidad.

2.4 **Mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios de desarrollo infantil.**

Los jardines de cuidado infantil tienen beneficios sostenidos sobre el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) cuando los usuarios son niños de hogares en situación de desventaja y la calidad es alta. La evidencia es conclusiva sobre la importancia de proveer un entorno de calidad para los niños menores de tres años durante la expansión de los servicios a escala[7]. Por su parte, los programas de preescolar para niños de 3 a 5 años muestran sostenidamente beneficios de corto y largo plazo en escolaridad, progresión académica y empleo en el futuro[8], e incluso efectos intergeneracionales en educación, embarazo adolescente y tasas de criminalidad[9]. En 2013, la Ley 12.796 estableció la obligatoriedad de la oferta gratuita de educación básica para niños a partir de los cuatro años y el Plan Nacional de Educación 2014-2024 trazó la meta de la universalidad hasta 2016. No obstante, aún hay 48 municipios cearenses con tasas de cobertura preescolar inferior a 90% y para el grupo de 0 a 3 años en 2019 la tasa estatal era apenas 32,2%, menor que para el país (35,6%). Las escuelas del estado de Ceará han demostrado mejoramiento progresivo y resultados importantes como el mejor promedio de alfabetización en el país en 2019 de acuerdo con los datos del Sistema de Evaluación de la Educación Básica (SAEB), lo que puede estar asociado en parte a la expansión de la educación infantil. Asimismo, una evaluación de impacto de los CEI de PROARES II encontró diferencias significativas favorables, como la estructura física y disponibilidad de materiales educativos[10]. En el marco del programa, se fortalecerán los elementos de mejora de calidad de los CEI y se medirá esta dimensión.

2.5 **Fortalecimiento del SUAS.** Brasil cuenta con el SUAS que es el sistema público para promover la protección social de familias e individuos en situación de vulnerabilidad o riesgo social, mediante servicios, programas, proyectos y beneficios socioasistenciales. La puerta de entrada del SUAS es el CRAS, que opera el Servicio de Protección y Atendimento Integral a la Familia (PAIF) y el Servicio de Convivencia y Fortalecimiento de Vínculos (SCFV), orienta a la población sobre beneficios como las transferencias de Bolsa Familia, e inscribe personas elegibles en el Catastro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal. El SUAS es organizado desde el Gobierno Federal, que ha establecido mucha de la normatividad para su funcionamiento y transfiere recursos a los

⁵ El IDCRAS mide dimensiones de la estructura física, recursos humanos y servicios prestados en los CRAS, tratándose de un indicador sintético en una escala progresiva de 1 a 5. Cálculos realizados con datos de <http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index5.php>.

estados y municipios para su operatividad. Durante los últimos años las transferencias federales se han reducido en más de 50% en términos brutos, lo que ha generado la debilitación del sistema. Algunos gobiernos subnacionales, como en el caso de Ceará, han mantenido las inversiones en el SUAS con recursos propios y han incrementado el financiamiento operativo. Adicionalmente a este esfuerzo, aun se busca apoyar a los municipios donde existen brechas de cobertura y/o de calidad de los servicios, por medio de la provisión de infraestructura, equipamiento, y capacitación de los profesionales.

- 2.6 **Complejo Social Más Infancia (CSMI).** Estos centros reúnen características de los CEI y CRAS considerando que atienden a personas de las comunidades de mayor vulnerabilidad socioeconómica, ofreciendo a los niños servicios y actividades de educación. Los CSMI se distinguen por ofrecer a las familias (incluyendo adultos mayores) servicios de deporte, cultura, capacitación profesional, y generación de ingreso, todos orientados a diferentes etapas del ciclo de vida. Los CSMI tienen una amplia infraestructura y equipamiento adecuado para promover el desarrollo integral del niño y la convivencia familiar y comunitaria en un contexto multigeneracional. Aunque no hay una evaluación de impacto de los CSMI, debido a su reciente implementación, en otros contextos los centros comunitarios parecen contribuir a una serie de resultados positivos incluyendo cohesión y capital social y la reducción de la carga de cuidados familiares^[12]. Por ello, el gobierno de Ceará tiene interés de expandir la experiencia a lugares adicionales estratégicos en el estado. En el marco de la operación se realizará una evaluación de impacto de estos centros.
- 2.7 **Diversidad.** Estudios indican que cuando los niños afrodescendientes (AD) y blancos tenían acceso universal a educación preescolar de alta calidad, las brechas raciales en diversos indicadores educacionales disminuyen significativamente⁶. Y los datos indican que hay brechas sociales y raciales en el acceso a los jardines de cuidado infantil en el Estado de Ceará. Según la encuesta de hogares (2019), el 54,3% de los niños de 0 a 3 años de los hogares más ricos estaban matriculados en guarderías, mientras que solo el 27,8% de los niños más pobres asistía a la escuela⁷. Igualmente, dicha encuesta indica que la asistencia a preescolar entre niños AD de 0-5 años en Ceará se encuentra por debajo de la media nacional. Fortalecer enfoques que toman en cuenta la diversidad racial requiere que los CEI ajusten su diseño e implementación, lo que requiere, entre otras cosas, materiales y contenidos pertinentes, y demandan un trabajo cercano con las familias y comunidades. Los servicios de educación infantil que toman en cuenta la diversidad también facilitan la participación de los niños con discapacidad y de sus familias y dotan a los proveedores de apoyos que permiten que estos niños logren su desarrollo potencial, en igualdad de condiciones con el resto. Aproximadamente 1 de cada 11 personas en Ceará tiene una

⁶ Un estudio reciente de Friedman-Krauss y Barnett (2020) de niños en Boston, Massachusetts y Tulsa, Oklahoma encontró que cuando los niños negros y blancos tenían acceso universal a preescolar de alta calidad, las brechas raciales en la lectura al ingresar al jardín de infantes prácticamente se eliminaban, y las brechas en matemáticas se redujeron a la mitad. Deming (2009) encontró que la participación en el programa Head Start preescolar de EE. UU. aumenta la finalización de la escuela secundaria en 11 puntos porcentuales para los estudiantes negros con un efecto pequeño para los compañeros blancos y aumenta la finalización de la escuela secundaria en 16 puntos porcentuales para los estudiantes negros, pruebas maternales.

⁷ De acuerdo con el [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística \(IBGE\)](#), por ejemplo, los AD representan [un 70% del grupo por debajo de la línea de pobreza](#).

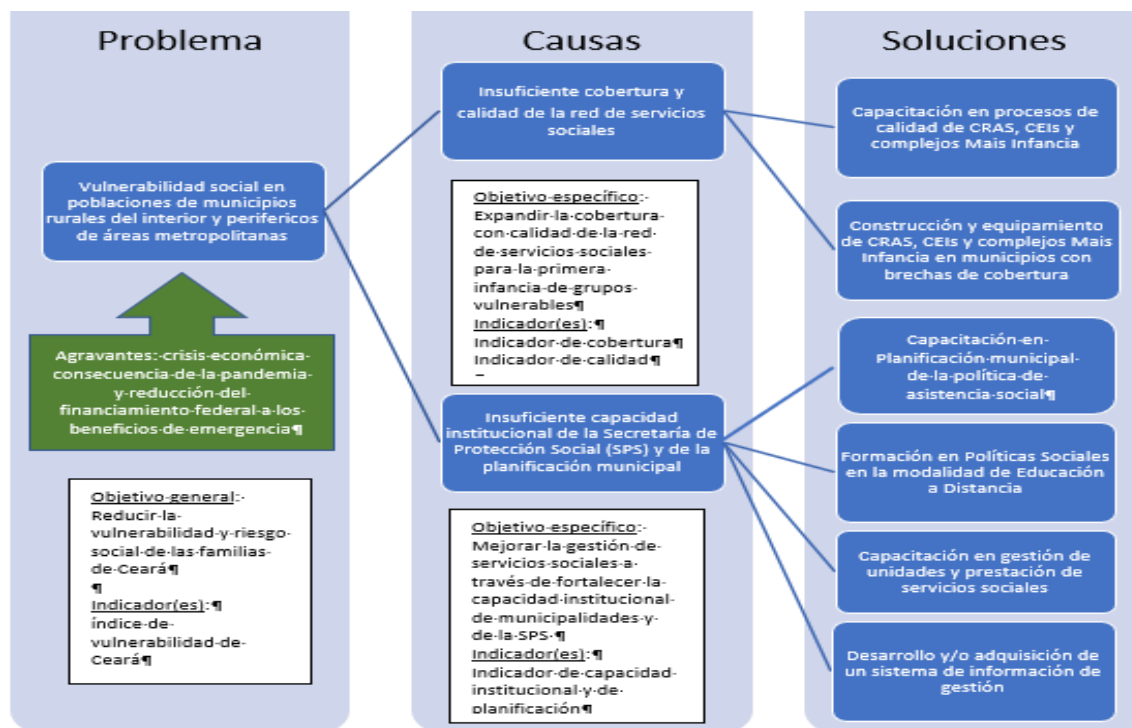
discapacidad⁸, más de 949.000 personas de dos años o más según la Encuesta Nacional de Salud (2019). Entre los niños de 2 a 9 años, el 2,3% (cerca de 23.000 niños) eran personas con discapacidad. Para permitir el acceso, es necesario remover barreras físicas y estructurales. Esto incluye contar con una oferta variada en cuanto a prácticas y formatos de aprendizaje. También requiere ajustes a los espacios físicos, las rutinas y las actividades, para que respondan a las necesidades de los niños. Además del acceso y la participación, los servicios de educación infantil con un enfoque inclusivo deben garantizar que las familias, los proveedores y los profesionales cuenten con los apoyos, conocimientos, habilidades y recursos requeridos para implementar las mejores prácticas. Esto puede incluir terapias y servicios especializados (NAEYC y DEC 2009).

- 2.8 **Género.** El cuidado infantil asequible impulsa la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Las evaluaciones de las intervenciones de cuidado infantil en ALC muestran un efecto consistentemente positivo del acceso a cuidado infantil asequible en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, aunque la evidencia es mixta sobre los ingresos de las mujeres (Mateo Díaz y Rodríguez-Chamussy, 2016). Los resultados indican aumentos del 2% al 22% en la probabilidad de que la madre esté empleada si se les da acceso a guarderías subsidiadas. Contreras et al. (2012) encuentran que la ubicación de las guarderías y los horarios de apertura compatibles con los horarios laborales se correlacionan positivamente con la oferta laboral de las mujeres en Chile. El acceso al cuidado de los niños también afecta a las mujeres empresarias y a la supervivencia de las empresas. Cuando el tiempo supervisado de los niños se limita efectivamente, como ocurrió con el cierre de las escuelas durante la pandemia, una investigación que utilizó datos de 50 países encontró que las empresas dirigidas por mujeres tenían 4 puntos porcentuales más de probabilidades de cerrar que las empresas dirigidas por hombres (Goldstein et al., 2022). Además, las normas de género arraigadas consideran que las mujeres son las principales cuidadoras de los niños y otras personas dependientes, de modo que las cargas de cuidado y otros trabajos domésticos no remunerados continúan recayendo desproporcionadamente sobre ellas y contribuyen a las brechas de género en el empleo y los ingresos. Las mujeres en Brasil dedican el doble de horas a las responsabilidades domésticas y de cuidado no remuneradas que los compañeros masculinos: 21 frente a 11 horas a la semana. Esta brecha se intensifica en los hogares con niños menores de cinco años o de bajos ingresos. Evidencia para LAC indica que la brecha de participación en el mercado laboral aumenta a 40 ppts entre hombres y mujeres con hijos menores de cinco años, mientras que la brecha es menor (24 puntos porcentuales) para aquellos con hijos mayores de 18 años (Egana-delSol et al., 2022), y el COVID-19 amplificó estas brechas⁹.
- 2.9 **Lógica de la Intervención.** A pesar de las mejoras que se han venido experimentando en los últimos años y el esfuerzo financiero de la Secretaría de Protección Social (SPS) del Estado de Caerá, existen todavía importantes segmentos poblacionales con problemas de alta vulnerabilidad social, particularmente en municipios rurales del interior y municipios periféricos de las

⁸ 10,6% de la población de dos años o más según la Encuesta Nacional de Salud, 2019.

⁹ Una encuesta regional del BID encontró que el doble de mujeres que de hombres informaron aumentos en el tiempo dedicado a las tareas domésticas y a la educación en el hogar de los niños asociados con la pandemia (Giles & Khadan, 2020).

regiones metropolitanas, afectando fundamentalmente a niños, jóvenes y mujeres, agravada esta situación por la crisis económica provocada por la pandemia por la COVID-19 y la reducción del financiamiento federal a los beneficios de emergencia, como demuestra el empeoramiento reciente de algunas dimensiones del IVSJ. Contribuyen a esta situación, la existencia de brechas de cobertura y de calidad de la red de servicios sociales, junto a debilidades institucionales de planificación municipal y de gestión de la SPS. Para revertir esta situación, el programa contribuirá a incrementar la cobertura y la calidad de los recursos asistenciales a través de ampliar la red de servicios con nuevas infraestructuras (CRAS, CEI y CSMI) en aquellos municipios con mayores brechas asistenciales, al tiempo que paralelamente mejorará la planificación municipal de la política de asistencia social y fortalecerá la capacidad institucional de la SPS a través de programas de capacitación e incorporación de sistemas de información gerenciales.



- 2.10 **Alineación Estratégica.** El proyecto está alineado con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional del Grupo BID (AB-3190-2) a través del desafío de inclusión social e igualdad, al contribuir al acceso equitativo a los servicios sociales para reducir la vulnerabilidad y el riesgo social. También se alinea con las áreas transversales de igualdad de género y diversidad, al favorecer la accesibilidad equitativa a servicios sociales, entre otros, a niños y familias AD, niños con discapacidad y a mujeres de poblaciones vulnerables; de cambio climático, al promover inversiones en infraestructura sostenible y resiliente, y de Capacidad Institucional y Estado de Derecho por medio del fortalecimiento de la gestión de servicios sociales de los municipios beneficiarios. Contribuye al Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12) mediante el incremento de beneficiarios de los programas destinados a combatir la pobreza (Indicador #2.3 Beneficiarios de programas focalizados contra la pobreza) y el incremento de la

capacidad institucional de gestión de la SPS (Indicador #2.26 Instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas). Está alineado con la Estrategia del Grupo BID en el país, con el área prioritaria (iv) de reducir la desigualdad social (GN-2973). Y es consistente con el Marco Sectorial de Protección Social y Pobreza (GN-2784-12) al apoyar a servicios para la inclusión. Igualmente, también pendiente de su actualización, está alineado al Plan Estratégico de la Secretaría de Protección Social 2019-2022 del Estado de Ceará, con los objetivos de promover la protección e inclusión socio-productiva de individuos y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo personal y social.

C. Objetivos y componentes

- 2.11 **Objetivo General.** El objetivo principal del programa es reducir la vulnerabilidad y el riesgo social de las personas y sus familias en los municipios más pobres de Ceará, a través de su inclusión en servicios sociales especializados, así como mejorar el desarrollo infantil de los niños de hogares vulnerables que reciben servicios mediante el SUAS.
- 2.12 **Objetivos específicos.** Los objetivos específicos del programa son: (i) expandir la cobertura con calidad de la red de servicios sociales para la primera infancia de grupos vulnerables ofrecidos por el SUAS; y (ii) mejorar la gestión de servicios sociales, a través del fortalecimiento de la capacidad institucional de la SPS y municipalidades en términos de planificación, políticas de educación a distancia, gestión y sistemas de información.
- 2.13 Para lograr estos objetivos, se plantean dos componentes que se describen a continuación:
- 2.14 **Componente 1. Expansión de los Servicios Sociales y mejora de la calidad de los procesos de atención [BID US\$41.162.877 – Local US\$17.641.233].** Este componente tiene como objetivo fortalecer y ampliar la calidad y cobertura de la red de servicios sociales de aproximadamente 97 municipios en Ceará, mejorando la gestión integrada y buscando reducir las desigualdades regionales e intermunicipales. Se prevé la financiación, entre otras, de las siguientes acciones: (i) elaboración de una estrategia de mejora de la calidad en los CEI y Complejos Sociales Más Infancia (CSMI) y capacitación de los recursos humanos que trabajan en los mismos; y (ii) construcción, y equipamiento de los CRAS, CEI y CSMI en municipios con brechas de cobertura.
- 2.15 **Componente 2. Mejora de la gestión y planificación de los servicios sociales [BID US\$6.533.484 – Local US\$787.338].** Este componente tiene como objetivo aumentar la capacidad institucional de la SPS para la implementación de políticas y estrategias de asistencia social, así como la capacidad de planificación de las políticas de asistencia social de las municipalidades. Está previsto el financiamiento, entre otras, de las siguientes acciones: (i) formación en Políticas Sociales en la modalidad de Educación a Distancia (EaD); (ii) capacitación en gestión de unidades y prestación de servicios sociales (Programa de Capacitación Gerencial); ((iii) desarrollo y/o adquisición de un sistema de información de gestión; y (iv) capacitación en planificación municipal de servicios sociales.

- 2.16 **Administración, monitoreo y evaluación del programa [BID US\$2.303.639 – Local US\$3.000.000].** Este componente apoyará a la SPS en la ejecución del programa, el seguimiento de las actividades y la medición de los resultados. Está previsto el financiamiento, entre otras, de las siguientes actividades: (i) estudios, investigaciones y misiones técnicas; y (ii) evaluaciones (intermedias, de impacto y finales) y auditorías. También se financiará un equipo multidisciplinario con la tarea de proveer a las diversas instancias del programa, así como a la población en general, de información de gestión sobre el cumplimiento, resultados e impactos de los componentes y actividades; así como los gastos recurrentes del Programa y las adquisiciones y/o alquiler de vehículos y otros bienes.
- 2.17 **Beneficiarios.** Las inversiones del Componente 1 tendrán lugar en municipios no beneficiados en la primera fase de PROARES con el fin de incrementar la cobertura, mientras que las actividades de mejora de la gestión y la planificación de los servicios abarcarán a todo el estado. El programa se focalizará en 97 municipios con los más altos índices de vulnerabilidad social (IVS), incrementándose al final del mismo la capacidad de atenciones anuales en los CRAS en 180.000 y de 38.000 en los CSMI. Igualmente, al final de la intervención se habrán incrementado un total de 7.300 nuevas plazas en los CEI¹⁰. Adicionalmente, un total de 4.500 funcionarios y/o consejeros del SUAS se beneficiarán de los programas de capacitación y mejora de las capacidades gerenciales.
- 2.18 **Resultados esperados.** El programa fomenta actividades de inclusión social dirigidas a la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad social. Se espera reducir la vulnerabilidad social de las familias beneficiarias y la inclusión de las minorías sociales en las condiciones de educación y salud, lo que además tiene un impacto indirecto positivo en la generación de empleo y en los ingresos de estas poblaciones, todo lo cual se medirá a través de la mejoría del IVS y el IVSJ del Estado de Ceará. Asimismo, las inversiones del programa: (i) mejorarán la capacidad institucional de las instancias de referencia de la política de asistencia social, educación y deporte del Estado de Ceará a través de la capacitación del recurso humano y la mejora de los sistemas de información de la SPS; y (ii) fortalecerán la capacidad municipal de planificación de los servicios sociales y crearán infraestructura y equipamiento adecuados para incrementar la cobertura y la calidad de los mismos.

III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Instrumento de financiamiento, monto y periodo de desembolso.** El presente programa se plantea como un préstamo de inversión específica, dado que es una operación con alcance totalmente definido cuyos componentes no se pueden dividir sin afectar su lógica, y con un monto total de US\$71.428.571 de los cuales US\$50.000.000 se financiarán con recursos del Capital Ordinario (CO) del Banco y US\$21.428,571 con fondos locales. El periodo de desembolso será de cinco años.

¹⁰ Se construirán 20 nuevos CRAS que puede atender mensualmente a 750 familias y cuatro nuevos CSMI que pueden atender mensualmente a 750 familias. Se construirán 73 nuevos CEI con capacidad de 100 plazas cada uno.

- 3.2 **Capacidad Institucional y Esquema de Ejecución.** El prestatario será el Estado de Ceará y el Organismo Ejecutor (OE) será el prestatario por intermedio de la Secretaría de Protección Social (SPS) siendo la República Federativa de Brasil el garante de las obligaciones financieras del Préstamo. El Estado de Ceará tiene una amplia experiencia en la ejecución de programas con financiamiento de organismos multilaterales, habiendo completado proyectos con el BID en sectores como Protección Social, Transporte y Modernización Fiscal. Como ejemplo están los siguientes Proyectos: el Programa de Modernización de la Gestión Tributaria PROFISCO II-CE ([4436/OC-BR](#)), siendo la primera operación que integra la Línea de Crédito Condicional (CCLIP) PROFISCO II [BR-X1039](#); el Programa de Apoyo a la Reforma Social PROARES III 1ª fase ([3408/OC-BR](#)); y el Programa Vial de Integración y Logística IV ([3395/OC-BR](#)).
- 3.3 La Unidad de Gestión del Programa (UGP) será la misma que actualmente implementa PROARES III – 1ª Fase y está formada por funcionarios comisionados del Estado de Ceará que cuentan con el apoyo de Consultores Individuales que han sido contratados tras un proceso de selección competitivo y con experiencia comprobada en trabajos similares en programas financiados por organismos multilaterales. El programa mantendrá el diseño institucional actual para aprovechar la experiencia del equipo. Se realizará un análisis de capacidad institucional que identificará posibles riesgos para el logro de los objetivos del programa, identificando las medidas de mitigación necesarias para reducirlos. En los análisis realizados durante la misión de identificación, se establecieron los siguientes temas prioritarios para la generación de conocimiento en la fase de preparación: (i) diagnóstico de las brechas en el servicio y de la calidad de los mismos; (ii) análisis costo-beneficio de las intervenciones propuestas; y (iii) análisis de los impactos ambientales y sociales. La UGP contratará una o varias firmas supervisoras de obras, dada la dispersión geográfica de las mismas, con la finalidad de reducir los riesgos de retrasos en la ejecución de las mismas.
- 3.4 **Lecciones aprendidas.** PROARES III - 2ª fase representa la consolidación de las políticas públicas implementadas a través de la implementación de PROARES III en la 1ª fase, al tiempo que propone avances significativos en el seguimiento de la primera infancia. La continuidad de un programa de esta magnitud requiere la observación de las lecciones aprendidas de la implementación de este programa - 1ª fase, la construcción de una estructura técnica e institucional adecuada que coordine los esfuerzos de los diferentes sectores y niveles gubernamentales, así como los segmentos sociales directamente involucrados con sus acciones. Entre las principales conclusiones de PROARES II destacan la necesidad de incorporar indicadores objetivos el sistema de monitoreo del programa, así como el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los niveles municipales y estatales. En este sentido, el Componente 2 del programa implementará un sistema de información que permita el tratamiento de estos indicadores para la toma de decisiones de forma oportuna a las autoridades responsables de las políticas sociales; igualmente, dicho componente financiará actividades que de fortalecimiento de las capacidades gerenciales de los servicios sociales en estos niveles.
- 3.5 **Género y Diversidad.** Los CEI y CSMI incluirán, en su diseño e implementación, enfoques que toman en cuenta la diversidad, incluyendo, entre otras cosas, materiales y contenidos pertinentes a la diversidad racial, y metodologías para un

trabajo cercano con las familias y comunidades. Para permitir el acceso a los niños con discapacidad, el diseño e implementación incluirá ajustes a los espacios físicos, las rutinas y las actividades, para que respondan a las necesidades de los niños. La implementación también incluirá la priorización del acceso a los CEI y CSMI de hogares monoparentales con jefatura femenina.

- 3.6 **Mitigación y adaptación al cambio climático.** El programa busca garantizar la sostenibilidad ambiental de sus acciones de tal forma que los centros financiados por el Componente 1 (CRAS, CEI y CSMI) cumplirán con criterios de sostenibilidad y resiliencia climática, alcanzando niveles de ahorro de al menos 20% en consumo energía (final e incorporada en materiales de construcción) y en consumo de agua.

IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 **Salvaguardas ambientales y sociales.** De acuerdo con el Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS) del Banco, y con base en la información existente, el programa se clasifica como categoría de impacto socioambiental B, debido a que las actividades a desarrollarse podrían generar impactos ambientales y sociales negativos temporales vinculados a la construcción de infraestructura de protección social, como ruido, uso y manejo de sustancias peligrosas, e impactos en la salud y seguridad ocupacional, así como comunitaria. Con el fin de atender los requerimientos establecidos en las Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS), se realizarán las siguientes acciones durante la preparación de la operación: (i) Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) para la operación, de acuerdo a la NDAS 1, incluyendo la preparación de un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) específico y un Plan de Participación de las Partes Interesadas que engloba una Estrategia de Pre-Consulta; (ii) Elaborar una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) del programa; (iii) Identificar y orientar al Organismo Ejecutor (OE) sobre los criterios y procedimientos para inclusión de obras en el programa en la etapa de ejecución de la operación. Para el desarrollo del PACÍ y durante la ejecución del programa se prestará especial atención a la capacidad del OE con relación a la supervisión y gestión de los riesgos ambientales y sociales relativos a la construcción de las infraestructuras.
- 4.2 **Otros riesgos.** Se identificaron cuatro riesgos principales para la ejecución del programa, dos de ellos clasificados en categoría media-alta (i y ii) y otros dos en categoría media-baja (iii) y baja (iv). Estos riesgos fueron divididos en categorías Procesos Interno, Estructuras Organizativas, Bienes y Servicios y Salvaguardias ambientales y sociales, en síntesis son los siguientes: (i) Demora para el inicio de las obras; (ii) dificultad para la adquisición de terrenos debido a mala coordinación con los municipios; (iii) baja oferta de empresas para la ejecución de las obras; y (iv) dificultad para cumplir con las políticas socioambientales, los cuales se mitigarán utilizando las mejores prácticas del Banco en la implementación de proyectos similares.
- 4.3 Para mitigar estos riesgos, se propone: (i) capacitar al OE, y apoyar con la elaboración de los términos de referencia y, de ser necesario, con la contratación de más recurso humano; (ii) el inicio anticipado de negociaciones con los municipios seleccionados para el programa; (iii) proceder a una amplia difusión

para las futuras licitaciones del programa, a fin de atraer empresas de calidad; y (iv) fortalecer los procesos de seguimiento de proyectos, además de la contratación de una empresa para apoyar la implementación y supervisión del sistema de gestión socioambiental.

- 4.4 **Aspectos fiduciarios.** No habrá excepciones a las políticas del Banco. La gestión financiera del programa se llevará a cabo de acuerdo con la Guía para la Gestión Financiera de los proyectos financiados por el BID (OP-273-12), que establece, entre otras cosas, las modalidades de desembolso y las auditorías externas de los informes financieros del Programa, que se acordarán con el Banco. Las contrataciones del programa serán realizadas de acuerdo con las Políticas de Adquisiciones del BID (GN-2349 y GN-2350-15).
- 4.5 El riesgo fiduciario es bajo, por ser la segunda vez que el OE ejecuta un programa de préstamo con el Banco. Para identificar los posibles riesgos relacionados con el programa, se realizará un análisis detallado de las capacidades institucionales (PACI).
- 4.6 **Financiamiento retroactivo.** El Banco podrá financiar retroactivamente, con cargo a los recursos del préstamo, los gastos elegibles efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo, hasta por un monto de US\$10 millones (20% del monto del préstamo propuesto), para pagar la construcción y equipamiento de CRAS, CEI y CSMI en municipios con brechas de cobertura, siempre que se cumplan requisitos sustancialmente similares a los establecidos en el contrato de préstamo. Estos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil de Proyecto y en ningún caso se incluirán gastos incurridos con más de 18 meses de anterioridad a la fecha de aprobación del préstamo. Este financiamiento retroactivo se justifica por la necesidad de asegurar una continuidad en el plan de expansión de la cobertura de los servicios sociales en el Estado de Ceará, sin interrupción de las inversiones, paralelamente al proceso de aprobación de la operación.

V. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 5.1 El Anexo V de este documento detalla la ruta crítica de preparación del proyecto. Se estima que la distribución del POD para la Revisión de Calidad y Riesgo (QRR) se realizará el 14 de junio de 2023, la aprobación del Borrador de Propuesta de Préstamo por el Comité de Políticas Operativas el 24 de julio; y la aprobación de la Propuesta de Préstamo por el Directorio Ejecutivo del Banco el 20 de septiembre. Se estimó un presupuesto para la preparación de US\$52.000 para consultorías y de US\$24.000 para misiones.
- 5.2 Al ser una segunda fase, la Resolución COFLEX inicial de 19 de diciembre de 2013 continua válida para esta operación. Se están realizando las coordinaciones oportunas con la SPS del Estado de Ceará referente a la aprobación de la “Lei Autorizativa”, considerando que es un requisito para la negociación de la operación con el Gobierno Federal, considerando que se tendrá para el 1 de Julio.

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).

Operation Information

Operation Name	
Support of Social Reforms in Ceara - PROARES III- Phase II	
Operation Number	BR-L1612

Operation Details

Organizational Unit	IDB Sector/Subsector
SCL/SPH	POVERTY ALLEVIATION
Type of Operation & Modality	Original IDB Amount
LON / ESP	\$50,000,000.00
Executing Agency	Borrower
BR-SDPSJCME	ESTADO DE CEARA
ESG Primary Team Member	Team Leader
Ana Beatriz De Souza Esteves	Luis Buscarons Cuesta
Toolkit Completion Date	Author
16/12/2022	De Souza Esteves, Ana Beatriz
Applicable ESPSs with requirements	
ESPS 1; ESPS 2; ESPS 3; ESPS 4; ESPS 9; ESPS 10	

Operation E&S Classification Summary

Environmental and Social Impact Categorization (ESIC)	B
Disaster and Climate Change Risk Classification (DCCRC)	Moderate
Environmental and Social Risk Rating (ESRR)	Substantial

Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions

There are no contextual risks associated with the project (e.g. political instability, oppression of communities, armed forces in the project area).

The operation will not have direct impacts associated with child labor or forced labor in the workforce.

The operation will not have significant indirect and/or cumulative impacts associated with child labor or forced labor in the workforce.

The Executing Agency or other relevant entity (in relation to the operation) has a proven track record to respect and protect the fundamental principles and rights of workers (including fair treatment, commitment to non-discrimination, equal opportunity, protection of workers including workers in vulnerable situations, work accommodations, migrant workers' rights, collective bargaining and rights of association) and compliance with national employment and labor laws.

The operation will not result in the direct loss of employment (i.e. retrenchment).

The operation will not result in the indirect and/or cumulative loss of employment (i.e. retrenchment).

The Borrower will prepare and operate a Grievance Redress Mechanism for all workers (direct and contracted).

The operation will not cause indirect and/or cumulative impacts associated with accidents, injury, and disease arising from, associated with, or occurring in the course of work.

The operation will promote a sustainable use of resources including energy, water and raw materials.

The operation will not have indirect and/or cumulative adverse impacts on human health and the environment due to pollution from project activities.

The operation will not have direct negative impacts to the environment and human health and safety due to the production, procurement, use, and disposal of hazardous materials such as PCBs, Radiological Waste, Mercury, CFCs, etc.

The operation will not have indirect and/or cumulative negative impacts to the environment and human health and safety due to the production, procurement, use, and disposal of hazardous materials such as PCBs, Radiological Waste, Mercury, CFCs, etc.

The operation will not have direct negative impacts to the environment and human health and safety due to the production, procurement, use, and disposal of pesticides.

The operation will not have indirect and/or cumulative negative impacts to the environment and human health and safety due to the production, procurement, use, and disposal of pesticides.

The operation is not expected to or currently produce directly GHG emissions.

The operation is not expected to or currently produce indirectly-cumulatively GHG emissions.

The operation is considering alternatives to implement technically and financially feasible and cost-effective options to avoid or minimize project-related GHG emissions during the design and operation of the project.

There are no direct health and safety risks associated with the design of structural elements or components of the operation (e.g. existing or new buildings, earthworks, bridges, drainage, roadways, power stations, transmission and distribution poles, underground utilities, and dams), and/or road transport activities (e.g. transport of heavy or over-sized equipment) which could result in health and safety impacts to third parties and project-affected people.

There are no indirect and/or cumulative health and safety risks associated with the design of structural elements or components of the operation (e.g. existing or new buildings, earthworks, bridges, drainage, roadways, power stations, transmission and distribution poles, underground utilities, and dams), and/or

road transport activities (e.g. transport of heavy or over-sized equipment) which could result in health and safety impacts to third parties and project-affected people.

The project will not directly affect the public (including workers and their families) by exposing them to hazardous materials released by the project, particularly those that may be life threatening.

The project will not indirectly-cumulatively affect the public (including workers and their families) by exposing them to hazardous materials released by the project, particularly those that may be life threatening.

The project's direct impacts on priority ecosystem services will not result in adverse health and safety risks and impacts to the project-affected people.

The project's indirect and/or cumulative impacts on priority ecosystem services will not result in adverse health and safety risks and impacts to the project-affected people.

There is no potential for an emergency or unanticipated event to occur in the project area of influence that demands immediate action to prevent or reduce harm to people, property, and/or the environment.

Natural hazards, such as earthquakes, droughts, landslides, floods, wildfires, or others, including those caused or exacerbated by climate change, are not likely to occur in the project area, and there will be no impact the project, and/or the project will not exacerbate the risk from natural hazards to human life, property, and/or the environment.

There is no potential direct impacts to workers and project-affected people related to the use or arrangement of security services to safeguard personnel and/or property.

There is no potential indirect and/or cumulative impacts to workers and project-affected people related to the use or arrangement of security services to safeguard personnel and/or property.

The project will not lead to direct impacts related to physical, and/or economic displacement - Impacts include, and are not limited to, relocation; expropriation; loss of shelter; loss of land; loss of assets; restrictions on land and natural resources; loss of income; loss of livelihoods; loss of social safety net.

The project will not lead to indirect and/or cumulative impacts related to physical, and/or economic displacement - Impacts include, and are not limited to, relocation; expropriation; loss of shelter; loss of land; loss of assets; restrictions on land and natural resources; loss of income; loss of livelihoods; loss of social safety net.

Vulnerable people will not be disproportionately affected by direct impacts related to land acquisition - people may be considered vulnerable by virtue of disability, state of health, indigenous status, gender identity, sexual orientation, religion, race, color, ethnicity, age, language, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic disadvantage, or social condition. Other vulnerable people include the elderly, children, single-headed households, refugees, internally displaced persons, natural resource dependent communities.

Vulnerable people will not be disproportionately affected by indirect and/or cumulative impacts related to land acquisition - people may be considered vulnerable by virtue of disability, state of health, indigenous status, gender identity, sexual orientation, religion, race, color, ethnicity, age, language, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic disadvantage, or social condition. Other vulnerable people include the elderly, children, single-headed households, refugees, internally displaced persons, natural resource dependent communities.

The operation doesn't have the potential to directly impact modified habitat that include significant biodiversity value.

The operation doesn't have the potential, including through the supply chain, to indirectly-cumulatively impact modified habitat that include significant biodiversity value.

The operation doesn't have the potential to directly convert or degrade natural habitat.

The operation doesn't have the potential, including through the supply chain, to indirectly-cumulatively convert or degrade natural habitat.

The operation doesn't have the direct potential to implement project activities in critical natural habitat.

The operation doesn't have the indirect and/or cumulative potential, including through the supply chain, to implement project activities in critical natural habitat.

The operation is not expected to directly impact a legally protected area or an internationally recognized area.

The operation is not expected, including through the supply chain, to indirectly-cumulatively impact a legally protected area or an internationally recognized area.

The project will not directly introduce (intentionally or accidentally) alien, or non-native, species of flora and fauna that have the potential for invasive behavior in areas where they are not normally found.

The project will not indirectly-cumulatively, including through the supply chain, introduce (intentionally or accidentally) alien, or non-native, species of flora and fauna that have the potential for invasive behavior in areas where they are not normally found.

The project is not likely to adversely directly impact ecosystem services.

The project is not likely to adversely indirectly-cumulatively, including through the supply chain, impact ecosystem services.

The project is not expected to cause adverse direct impact on Indigenous Peoples. FPIC is required when there will be (i) impacts on lands and natural resources subject to traditional ownership or under customary use; (ii) Relocation of Indigenous Peoples from lands and natural resources subject to traditional ownership or under customary use; or (iii) significant impact on Cultural Heritage.

The project is not expected to cause adverse indirect/cumulative impact on Indigenous Peoples.

Indigenous Peoples are not expected to be adversely impacted by direct project related land-acquisition or access restrictions. Note that all impacts on lands and natural resources subject to traditional ownership or under customary law requires FPIC.

Indigenous Peoples are not expected to be adversely impacted by indirect/cumulative project related land-acquisition or access restrictions. Note that all impacts on lands and natural resources subject to traditional ownership or under customary law requires FPIC.

The project doesn't have the potential to cause adverse direct impacts on Indigenous Peoples who live in isolation and initial contact.

The project doesn't have the potential to cause adverse indirect and/or cumulative impacts on Indigenous Peoples who live in isolation and initial contact.

The project is not expected to directly damage or negatively impact cultural heritage.

The project is not expected to indirectly-cumulatively damage or negatively impact cultural heritage.

The project is not expected to directly damage or negatively impact critical cultural heritage.

The project is not expected to indirectly-cumulatively damage or negatively impact critical cultural heritage.

The project will not negatively directly affect people due to their gender, sexual orientation or gender identity.

The project will not negatively indirectly-cumulatively affect people due to their gender, sexual orientation or gender identity.

The project is not expected to lead to indirect and/or cumulative risks and impacts associated with Sexual and Gender-based Violence.

The project will not potentially face direct barriers to equitable gender-based participation.

The project will not potentially face indirect and/or cumulative barriers to equitable gender-based participation.

The project will not deal with a subject matter and/or be implemented in an area where the manipulation, interference, coercion, discrimination, and intimidation of stakeholders has been documented.

ESPS 1 - Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts

The Executing Agency will conduct an Environmental and Social Assessment (ESA) or Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) process for the project during preparation.

The Executing Agency will prepare and maintain an Environmental and Social Management System (ESMS) for the operation as defined under ESPS 1.

The Borrower/Executing Agency's has good organizational capacity and competency for managing environmental and social issues.

ESPS 2 - Labor and Working Conditions

The Executing Agency will prepare and maintain an Environmental and Social Management System (ESMS) for the operation with specific elements related to Labor and Working Conditions under ESPS 2.

The operation has the potential to cause moderate direct impacts associated with accidents, injury, and disease arising from, associated with, or occurring in the course of work.

ESPS 3 - Resource Efficiency and Pollution Prevention

The operation will have minor direct adverse impacts on human health and the environment due to pollution from project activities.

The operation will generate moderate direct impacts generated by solid waste (hazardous and/or non-hazardous).

The operation will generate minor indirect and/or cumulative impacts generated by solid waste (hazardous and/or non-hazardous).

The operation has low exposure to climate transition risks related with a loss of value of a project driven by the transition to a lower-carbon economy, result from extensive policy, legal, technology, and/or market changes to address climate change.

ESPS 4 - Community Health, Safety, and Security

There is moderate potential for the project or project-related activities (e.g. the influx of temporary or permanent project labor, among others) to directly result in or exacerbate community exposure to water-related (i.e., waterborne, water-based, and vector-borne diseases) and/or communicable diseases (e.g. COVID).

There is minor potential for the project or project-related activities (e.g. the influx of temporary or permanent project labor, among others) to indirectly-cumulatively result in or exacerbate community exposure to water-related (i.e., waterborne, water-based, and vector-borne diseases) and/or communicable diseases (e.g. COVID).

ESPS 9 - Gender Equality

The project will potentially lead to minor direct risks and impacts associated with Sexual and Gender-based Violence.

ESPS 10 - Stakeholder Engagement and Information Disclosure

The Borrower will prepare a stakeholder engagement framework/plan for the lifetime of the program (including the equal participation of women and men and also take into account Indigenous Peoples, vulnerable groups when relevant).

The Borrower will engage in meaningful consultations and engagement with stakeholders which is free of manipulation, interference, coercion, discrimination, and intimidation.

The Borrower will operate a Grievance Redress Mechanism at the Project level (direct and contracted).

Resumen de la revisión ambiental y social	
Datos de la operación	
Número de la operación	BR-L1612
Sector/Subsector del BID	SCL/SPH (Inversión Social/ Alivio a la Pobreza)
Tipo y modalidad de la operación	LON/ESP
Clasificación de impacto ambiental y social inicial (ESIC)	B
Calificación inicial de riesgo ambiental y social (ESRR)	Sustancial
Clasificación inicial de riesgo de desastre y cambio climático (DCCRC)	Moderado
Prestatario	Estado De Ceará
Agencia ejecutora	BR-SDPSJCME
Monto del préstamo BID (y coste total del proyecto)	\$50,000,000.00 (\$50,000,000.00)
Normas de desempeño con requerimientos	ESPS 1; ESPS 2; ESPS 3; ESPS 4; ESPS 9; ESPS 10
Resumen ejecutivo	
<p>De acuerdo con el Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS) del Banco, y con base en la información existente, el programa se clasifica como categoría de impacto socioambiental B, debido a que las actividades a desarrollarse podrían generar impactos ambientales y sociales negativos temporales vinculados a la construcción de infraestructura de protección social, como ruido, uso y manejo de sustancias peligrosas, e impactos en la salud y seguridad ocupacional, así como comunitaria. Dichos impactos se pueden gestionar mediante la aplicación de medidas de gestión ambiental y social conocidas en programas de gestión ambiental y social y planes de comunicación e involucramiento de las partes interesadas.</p> <p>Los criterios de elegibilidad establecidos para la operación excluyen actividades que conlleven reasentamiento involuntario (físico o económico) y/o que generen impactos negativos sobre pueblos indígenas o hábitat crítico.</p> <p>La clasificación de riesgo socioambiental es Sustancial en base al hecho de que no se conocen las ubicaciones de las obras que se pretende construir. La definición de donde se construirá la infraestructura podrá provocar diferentes riesgos de impacto directo e indirecto en centros urbanos, así como pueden exponer la operación a riesgos contextuales de oposición social a dichas ubicaciones, o quizá riesgos de desempeño en lo que abarca las obligaciones de las unidades de gestión en las municipalidades que van a recibir las obras.</p> <p>La clasificación de riesgo de desastre y cambio climático es moderada, relacionada a la moderada probabilidad de que las obras vengán a ubicarse en áreas expuestas a eventos de desastres naturales. La infraestructura que se va a construir tiene prototipos de proyecto conocidos y exigen ubicarse en terrenos libres de amenazas geológicas y dentro de las áreas urbanas consolidadas, sin rasgos complejos asociados al cambio climático.</p> <p>Estas clasificaciones serán confirmadas durante el proceso de debida diligencia y la preparación de estudios ambientales y sociales adicionales para los proyectos en la fase de ejecución del programa.</p> <p>Con el fin de atender los requerimientos establecidos en las Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS), se realizarán las siguientes acciones durante la preparación de la operación: (i) Fortalecer el</p>	

Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) para la operación, de acuerdo a la NDAS 1, incluyendo la preparación de un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) específico y un Plan de Participación de las Partes Interesadas que engloba una Estrategia de Pre-Consulta; (ii) Elaborar una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) del programa; y (iii) Identificar y orientar la agencia ejecutora sobre los criterios y procedimientos para inclusión de obras en el programa en la etapa de ejecución de la operación.

Se realizará una consulta pública sobre la EASE durante el proceso de debida diligencia, previo a OPC, cuyos resultados serán incluidos en la versión final de la EASE a ser divulgado por el Banco.

Descripción de la operación

La operación Soporte a las Reformas Sociales en Ceará – PROARES III- Phase II, tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad y el riesgo social de individuos y de sus familias en las ciudades más pobres del Estado de Ceará, por intermedio de su inclusión en los servicios sociales diferenciados, así como por intermedio del desarrollo integral de los niños, fortaleciendo sus vínculos con la familia y con la comunidad. La operación está en proceso de preparación como una operación ESP con Framework Approach.

El Componente 1 financiará la expansión de los servicios sociales, específicamente de tres tipos de infraestructura social, que consisten en la construcción de: (i) 20 edificios del Centro de Referencia de la Asistencia Social (CRAS); (ii) 04 edificios del Complejos Más Infancia; y (iii) 73 edificios de los Centros de Educación Infantil. La ubicación de las edificaciones todavía no es conocida, a pesar de que es sabido que cerca de 100 ciudades del Estado de Ceará podrán beneficiarse de uno o más de esta infraestructura construida por el programa. Este es el único componente que financiará infraestructura o actividades con potencial impacto negativo sobre medioambiente y/o comunidades.

La agencia ejecutora tiene proyectos prototipos de los tres tipos de infraestructura que se planea financiar, que serán utilizados para evaluar los potenciales riesgos de impactos sociales y ambientales, en base a las tipologías de las obras, evaluadas en una EASE que se va a preparar en esta fase del programa. Dichos proyectos siguen una orientación estandarizada de las políticas de protección social locales, lo que permite anticipar de manera razonable las posibles amenazas asociadas al tipo de construcción.

Las obras se van a realizarse probablemente en centros urbanos consolidados, sin necesidad de desplazamiento físico o económico para su materialización o exposición a riesgos de desastres naturales/cambio climático, lo que enfoca los riesgos a los impactos temporarios de las obras para trabajadores y comunidad vecina a las obras.

Los terrenos deberán ser ofrecidos por las municipalidades para la construcción de la infraestructura como parte de la contrapartida de ellos, por lo que deberán estar libres, desocupados y de propiedad de las prefecturas al momento de la incorporación de la obra al programa. Dada la característica de los servicios que se van a ofrecer con esta infraestructura, la ubicación de las obras deberá ser en áreas consolidadas do trazado urbano de los potenciales municipios beneficiarios, lo que excluye riesgos de impactos directos e indirectos con hábitat natural/crítico y comunidades tradicionales.

El Componente 2 es un componente de fortalecimiento institucional que está enfocado en capacitaciones y adquisición de equipos y materiales para el sector de protección social local, y el Componente 3 es donde se aportan los recursos de administración del programa.

Fundamentos de las clasificaciones/calificaciones

Clasificación de impacto ambiental y social	El programa se clasifica como categoría de impacto socioambiental B, debido a que las actividades a desarrollar pueden generar impactos ambientales y sociales negativos temporales vinculados a la construcción de infraestructura de protección social, como ruido, uso y manejo de sustancias peligrosas impactos en la salud y seguridad ocupacional, así como comunitaria.
Calificación de riesgo ambiental y social	La clasificación de riesgo socioambiental es Sustancial en base al hecho de que no se conocen las ubicaciones de las obras que se pretende construir. La definición de donde se edificarán los equipamientos podrá provocar diferentes riesgos de impacto directo e indirecto en centros urbanos, así como pueden exponer la operación a riesgos contextuales de oposición social a dichas ubicaciones, o quizá riesgos de desempeño en lo que abarca las obligaciones de las unidades de gestión en las municipalidades que van a recibir las obras.
Clasificación de riesgo de desastre y cambio climático	La clasificación de riesgo de desastre y cambio climático es moderada, relacionada a poca probabilidad de que las obras vengán a ubicarse en áreas enmarcadas por eventos de desastres naturales. Los equipamientos que se van a edificar tienen prototipos de proyecto conocidos y exigen ubicarse en terrenos libres de amenazas geológicas y dentro de las áreas urbanas consolidadas, sin rasgos complejos asociados al cambio climático.
¿Se considera el marco ambiental y social del prestatario?	
No	
No se utilizará el marco ambiental y social del prestatario para esta operación. La preparación se realizará con base en el MPAS del Banco y las Normas de Desempeño Ambiental y Social 1 al 10 en complementariedad con el marco ambiental y social del prestatario.	
Normas de Desempeño Ambiental y Social aplicables al proyecto propuesto	
NDAS-1. Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales	Sí
PROARES III es una secuencia de operaciones anteriores cofinanciadas entre el BID y el mismo prestatario y agencia ejecutora: Gobierno del Estado de Ceará y Secretaría da Proteção Social, Justiça, Mulheres, Cidadania y Derechos Humanos (SPS), respectivamente. La operación anterior fue preparada bajo las políticas operativas anteriores del Banco, con las cuales ambos tienen experiencia en desarrollar proyectos. Como la operación anterior fue clasificada como de riesgo moderado, no hubo seguimiento por parte del equipo ESG/CBR que pudiera sostener una evaluación preliminar de la capacidad de la agencia Ejecutora en la gestión de los temas socioambientales de la operación.	
Esta es la primera operación que la agencia ejecutora prepara bajo el MPAS, pero el prestatario fue el primero que aprobó operaciones bajo en nuevo marco en Brasil aún en 2022, el Estado de Ceará.	
No hay estudios socioambientales disponibles hasta el momento, y el Banco, con recursos de la Division de Salud del Banco (SPH), apoyará el cliente en la elaboración de una Evaluación Ambiental y Social Estratégica, enfocada en las tipologías de obras, las cuales hoy son totalmente conocidas. No son	

conocidas las ubicaciones de las obras de manera específica, pero el cliente posee sus proyectos prototipos, los cuales son de baja complejidad y podrán ubicarse en cerca de 100 municipalidades potenciales en el Estado de Ceará.

Están excluidas de consideración cualquier potencial ubicación de obra que presente rasgos que puedan apuntar para impactos negativos a hábitats naturales/críticos o a comunidades tradicionales. Igualmente se puso como criterio de exclusión la consideración de terrenos para construcción que exijan desplazamiento físico y/o económico para permitir que se lleven a cabo las obras, por lo que no se anticipan comunidades vulnerables que puedan verse afectadas de manera desproporcional por las actividades a financiarse por intermedio del programa.

La estructura de gestión de la Unidad de Gestión del Programa, parte de la Secretaría da Proteção Social, Justiça, Mulheres, Cidadania y Derechos Humanos (SPS), es formada por funcionarios públicos, los cuales son asesorados por consultores individuales contratados con exclusividad para el programa. El cliente pretende mantener el mismo equipo que hizo parte de la ejecución de la primera fase del programa, lo cual cuenta con dos consultores sociales. Hay que subrayar que los consultores sociales son enfocados principalmente en los temas técnicos de protección social, no están involucrados/familiarizados necesariamente con los temas de salvaguardias socioambientales.

La Superintendencia de Obras Públicas (SOP/CE) estará encargada de preparar y/o revisar proyectos básicos y ejecutivos de las obras del Componente 1, así como de monitorear la ejecución de estas y de aprobar mediciones de las contratistas.

La existencia de un Sistema de Gestión Ambiental y Social – y si él es coherente con la complejidad de la operación y con el MPAS – se va a verificar durante la debida diligencia como parte de la consultoría para preparación de los estudios socioambientales. En esta oportunidad, los siete elementos siguientes serán confirmados: (i) un marco ambiental y social específico al Proyecto; (ii) la identificación de riesgos e impactos; (iii) programas de gestión ambiental y social; (iv) capacidad y competencia organizativas; (v) preparación y respuesta ante situaciones de emergencia; (vi) participación de las partes interesadas; y (vii) seguimiento y evaluación del desempeño ambiental y social del Proyecto.

Será divulgado previo a la Misión de Análisis un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) que rige para la operación como parte de su SGAS.

NDAS-2. Trabajo y condiciones laborales

Sí

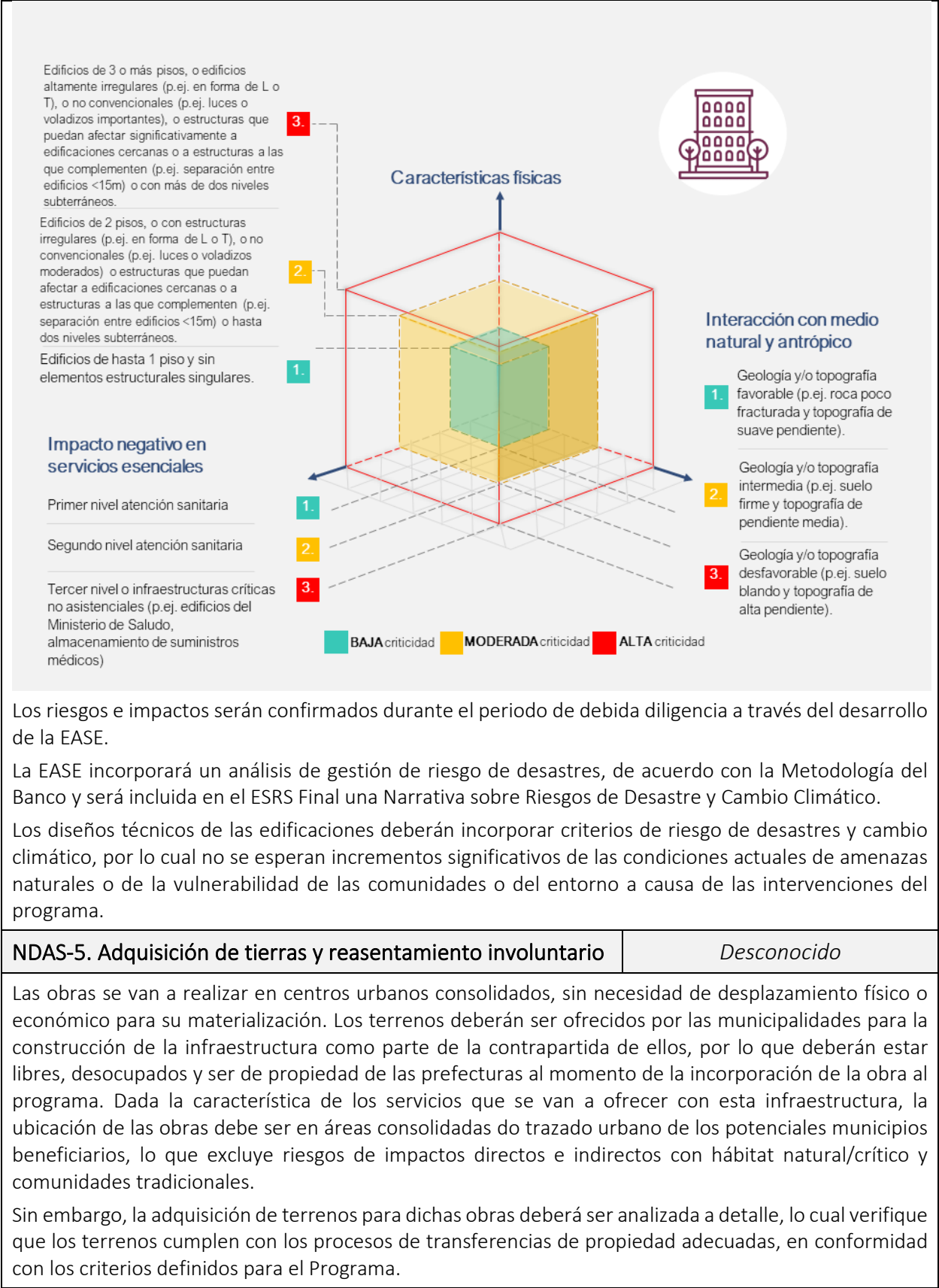
Las obras y actividades que resultan en intervenciones para construcción de equipamientos de protección social conllevan procesos de construcción y movilización de personal, que trae consigo riesgos e impactos asociados con el trabajo y condiciones laborales, incluyendo la salud y seguridad de los trabajadores.

Durante la debida diligencia se analizarán las brechas correspondientes con el NDA2 y se complementarán los análisis y planes de gestión correspondientes, lo que incluye verificar la existencia y/o adecuación de los Procedimientos de Gestión Laboral del Estado de Ceará vigentes. Del mismo, modo, se verificará la implementación de un mecanismo de recepción de reclamaciones por parte de los trabajadores y de un Código de Conducta. En caso de haber necesidades de ajustes, se propondrán alternativas para cerrar dichas brechas que van a formar parte del SGAS del Programa.

El SGAS específico del proyecto debe incorporar los requisitos establecidos en la NDAS 2 relacionados con seguridad y salud de los trabajadores y con condiciones labores. No se ha identificado de manera preliminar riesgos en la generación de trabajo infantil ni forzado, pero estos riesgos serán verificados durante la debida diligencia. La edad mínima para trabajos en Brasil es 16 años, a excepción de la condición de “menor aprendiz”, que permite contratar personas a partir de 14 años, pero solamente en actividades administrativas y/o de apoyo en secretariado. Además, la ubicación de las obras, siendo en

<p>áreas urbanas, permite fácil control de las autoridades fiscales del trabajo respecto a adecuación de la cadena de profesionales movilizados para las obras.</p> <p>Finalmente, durante la debida diligencia se analizarán los temas referidos, la no discriminación y la libertad de asociación y negociación colectiva, así como las medidas requeridas para evaluar estas a ser incorporadas en la EASE.</p>	
NDAS-3. Uso eficiente de los recursos y prevención de la contaminación	<i>Sí</i>
<p>Las ubicaciones específicas de las obras todavía no son conocidas, pero deberán ubicarse en el área urbana de las ciudades elegibles para recibir las inversiones, excluyendo áreas rurales donde haya potenciales riesgos a hábitats críticos y/o a comunidades vulnerables/tradicionales.</p> <p>Durante la etapa constructiva se esperan impactos negativos localizados y temporales como: (i) incremento en niveles de presión sonora, vibraciones, polvo, partículas y gases por incremento del tráfico de vehículos y maquinaria; (ii) contaminación del suelo o del agua por derrames de grasas y aceites, combustibles y otros materiales peligrosos; y (iii) contaminación del aire por emisión de gases.</p> <p>La EASE identificará impactos y riesgos de contaminación ambiental directos, indirectos y acumulativos potenciales de cada prototipo de equipamiento que se pretende edificar y se deben establecer medidas de manejo orientadas a su adecuada incorporación al programa, además de las medidas que garanticen su adecuada gestión, empleando la jerarquía de mitigación. Se deben identificar medidas para el fomento del uso eficiente del agua y la energía en la etapa constructiva.</p> <p>Los riesgos e impactos serán confirmados durante el periodo de debida diligencia a través del desarrollo de la EASE, así como serán estimadas las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la operación, a ser reportadas en el ESRS Final</p>	
NDAS-4. Salud y seguridad de la comunidad	<i>Si</i>
<p>No son conocidas las ubicaciones exactas ni de parte ni de todo el conjunto de obras que se pretende financiar. De esta manera, la identificación de los riesgos y posibles impactos respecto a salud y seguridad de la comunidad quedan condicionados a realización de la EASE, la cual identificará posibles riesgos asociados a las características de las probables áreas de influencia del programa.</p> <p>Son esperados impactos de baja magnitud, asociados al manejo de aguas residuales provenientes del área de obra, crecimiento del flujo del tránsito de máquinas pesadas, posible crecimiento de exposición al COVID 19, todas con soluciones conocidas y de fácil aplicación.</p> <p>Preliminarmente se ha identificado como bajo el riesgo de desastres. Según la plataforma ThinkHazard¹, el estado de Ceará se encuentra expuesta a amenaza alta por inundación fluvial y costera alta, y según la Screening App del BID, el estado presenta amenaza alta por sequía y olas de calor (ver Anexos). El proyecto no contempla obras que puedan exacerbar condiciones de riesgo natural para las comunidades en el área de interés.</p>	

¹ Información disponible para consulta en <https://thinkhazard.org/en/report/7173-brazil-espirito-santo-linhares>.



Los riesgos e impactos serán confirmados durante el periodo de debida diligencia a través del desarrollo de la EASE.	
NDAS-6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos	<i>No</i>
<p>Las intervenciones se realizarán en lugares antropizados. No se prevén intervenciones que puedan afectar hábitat natural, hábitats críticos, zonas legalmente protegidas o reconocidas a nivel internacional ni servicios ecosistémicos.</p> <p>Los riesgos e impactos serán confirmados durante el periodo de debida diligencia a través del desarrollo de la EASE.</p>	
NDAS-7. Pueblos indígenas	<i>No</i>
<p>Las obras se van a realizar en centros urbanos consolidados. Los terrenos deberán ser ofrecidos por las municipalidades para la construcción de los equipamientos como parte de la contrapartida de ellos, por lo que deberá estar libres, desocupados y ser de propiedad de las prefecturas al momento de la incorporación de la obra al programa. Dada la característica de los servicios que se van a ofrecer con esta infraestructura, la ubicación de las obras deberá ser en áreas consolidadas do trazado urbano de los potenciales municipios beneficiarios, lo que excluye riesgos de impactos directos e indirectos con hábitat natural/crítico y comunidades tradicionales, ahí incluidas las poblaciones indígenas y quilombolas. Todo esto será verificado con el EASE.</p> <p>Los riesgos e impactos serán confirmados durante el periodo de debida diligencia con el desarrollo de la EASE.</p>	
NDAS-8. Patrimonio cultural	<i>Desconocido</i>
Durante la debida diligencia se verificarán los potenciales impactos al patrimonio cultural a través del desarrollo de la EASE. Se incluirá un procedimiento de hallazgos fortuitos como parte da EASE.	
NDAS-9. Igualdad de género	<i>Sí</i>
Los riesgos e impactos relevantes que serán materia de la debida diligencia y están referidas a potencial incremento de violencia de género, la exclusión y/o discriminación. Durante la diligencia debida se identificarán con mayor detalle estos riesgos e impactos y se propondrán las medidas de mitigación correspondientes, incluyendo medidas de prevención, la adopción de códigos de conducta, entre otros a ser incorporados en la EASE.	
NDAS-10. Participación de las partes interesadas y divulgación de información	<i>Sí</i>
<p>Durante la debida diligencia se preparará un Plan de Participación de Partes Interesadas, que incluya el mapeo de actores con especial atención a partes que presenten niveles de vulnerabilidad, el proceso de consulta y la interacción con todas las partes afectadas e interesadas del Proyecto.</p> <p>Se realizará un proceso de consulta durante el proceso de la debida diligencia de acuerdo con el avance que presenten los estudios ambientales y sociales correspondientes. Igualmente se propondrá procedimientos específicos de consulta y participación de las partes interesadas para la etapa de ejecución, cuando habrá evaluación de la elegibilidad de cada inversión, en base a tipología de la obra y su ubicación específica, ahora desconocida.</p>	

Del mismo modo, el proyecto deberá contar con un programa de atención de reclamaciones de temas ambientales, sociales y salud y seguridad que permita a los grupos reclamantes proceder a manifestar sus preocupaciones.			
Diligencia ambiental y social debida en el BID			
Para las operaciones cofinanciadas, ¿se contempla un enfoque común con otros prestamistas?			No
La operación solamente la financiará el BID.			
Estrategia de diligencia debida			
En el cuadro a continuación se relacionan los requisitos de evaluación ambiental y social requeridos para la preparación de la operación para cerrar brechas preliminarmente identificadas con base en la información suministrada por el prestatario.			
Requisito de evaluación ambiental y social	Estado de desarrollo	Recursos estimados para finalizar (especificar el costo para el Banco o el prestatario)	Calendario estimado para finalizar (incluida la consulta)
Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) con Plan de Gestión Ambiental y Social Estratégica (PGASE)	A ser elaborado	Consultoría externa PEC. Recursos de SPH en la orden de US\$20.000,00	Ejecución: comienzo previsto para febrero/2023. Consulta: mediados de mayo de 2023.
Plan de Consulta y Participación de las Partes Interesadas	A ser elaborado	Consultoría externa PEC. Incluida en la contratación PEC de la EASE	Ejecución: comienzo previsto para febrero/2023. Consulta: principios de mayo de 2023.
Sistema de Gestión Ambiental y Social y Marco Específico del Proyecto Ambiental y Social.	A ser elaborado	Consultoría externa PEC. Incluida en la contratación PEC de la EASE	Ejecución: comienzo previsto para febrero/2023. Cierre: fines de mayo
Anexos			
Anexo A		Mapas A&S	

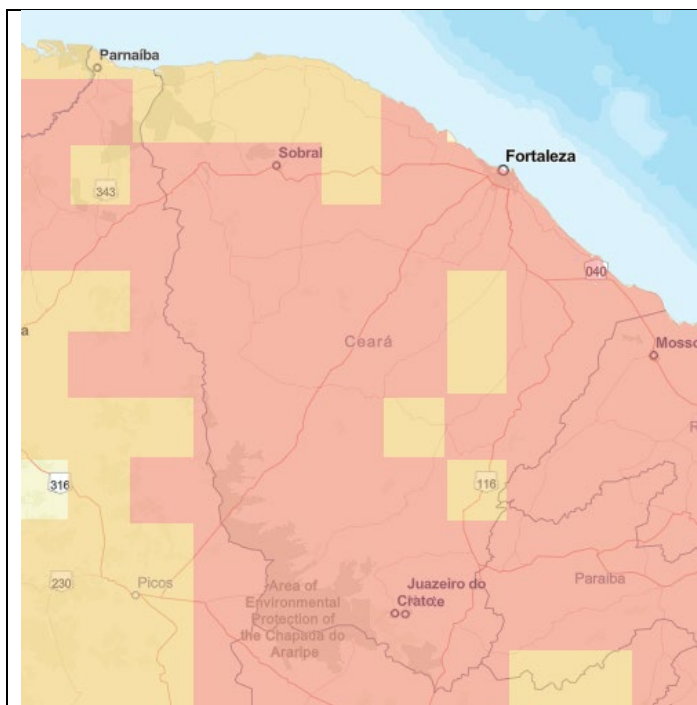
Anexo A. Mapas ambientales y sociales



Áreas claves para la biodiversidad y áreas protegidas en el Estado de Ceará (polígonos verdes)



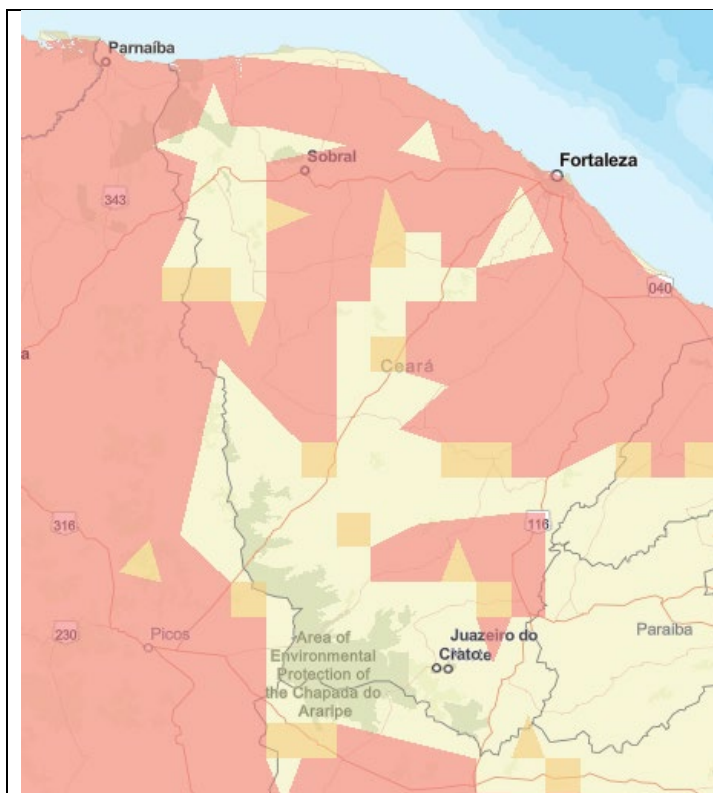
Territorios indígenas y tierras de quilombolas en el Estado de Ceará (polígonos azules)



Riesgo de sequía en el Estado de Ceará (rojo = alto; anaranjado = moderado)



Riesgo de inundación fluvial con escenario de cambio climático en el Estado de Ceará (polígonos rojos)



Riesgo de olas de calor con escenario de cambio climático en el Estado de Ceará (rojo = alto; anaranjado = moderado)

ÍNDICE DE LAS ACTIVIDADES SECTORIALES CONCLUIDAS Y PROPUESTAS

Temas	Descripción	Año	Referencia
Diagnóstico del Sector	Diagnóstico de Programas de Políticas Públicas	2022	Travessia Políticas Públicas, 2022
	Resumo Para Políticas. Programas de proteção social a famílias em situação de vulnerabilidade	2022	Travessia Políticas Públicas, 2022
	Brasil do Futuro. Relatório do grupo técnico de Desenvolvimento Sócia. Produto 2 (Relatório Final)	2022	Comissão de Transição Governamental 2022
	Carta consulta aprobada	2022	link
	Secretaria de Proteção Social, Justicia, Cidadania, Mulheres i Direitos Humanos. Planejamento Estratégico 2019-2022	2019	Governo do Estado de Ceara
	Mais Infancia Ceara. De Programa a Política Pública Permanente	2022	Governo do Estado de Ceara
Documentos orientadores del Banco	Documento de Marco Sectorial de Protección Social y Pobreza	2022	GN-2735-12
	Brasil. estrategia de País del BID 2019-1022	2019	GN-2973
Viabilidad del Proyecto	Evaluación de los CEI de PROARES II. Diagnóstico de brechas de servicios y de calidad	Mayo 2023	Pendiente
	Análisis de la Capacidad Institucional PACI	Mayo 2023	Pendiente
	Análisis Costo-Beneficio de las principales intervenciones	Mayo 2023	pendiente
	Análisis Ambiental y Plan de Gestión Ambiental y Social	Abril 2023	pendiente

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).